

E

Editorial

La crítica espera sanitaria regional

Con más de 210 mil prestaciones pendientes, Los Lagos enfrenta una emergencia que demanda acciones concretas y no sólo diagnósticos o búsqueda de culpables.

Un liderazgo que nadie desea. Ese es el que ostenta hoy la Región de Los Lagos, posicionada en el primer lugar nacional en listas de espera para cirugías no GES y con la tercera tasa más alta en consultas pendientes. El reciente informe del Núcleo Faro UDD no hace más que cuantificar una crisis palpable: más de 210.000 prestaciones de salud que no llegan, dejando a miles de ciudadanos en una incertidumbre que amenaza directamente su bienestar y, en muchos casos, sus vidas.

El análisis también apunta a un alza del 45% en la emisión de licencias médicas en la región entre 2019 y 2023, lo que representa un gasto superior a los \$103 mil millones sólo en el último año.

Si bien este fenómeno se asocia a un sistema de salud estresado y a las secuelas de la pandemia, su impacto en la disponibilidad de recursos humanos y financieros es innegable, agravando la capacidad de respuesta del sistema público. Mientras las cifras exponen la magnitud del problema, el debate público se pierde en un laberinto de responsabilidades cruzadas. Se apunta a la gestión ministerial, a la administración de los servicios de salud locales, a la falta de recursos o al posible abuso del sistema de licencias. Sin embargo, esta discusión, aunque necesaria, se vuelve estéril si no se traduce en acciones concretas y eficientes. La politización del dolor ciudadano sólo posterga las verdaderas soluciones. Resulta imperativo superar el diagnóstico y la búsqueda de culpables para centrarse en la gestión proactiva. Existen ejemplos locales, como la rápida articulación entre el Parlamento y el Gobierno Regional para adquirir equipamiento y retener especialistas en Osorno, que demuestran que es posible encontrar salidas cuando la voluntad política se enfoca en el enfermo. Detrás de cada número hay una historia de dolor, postergación y vulnerabilidad. La inacción o la gestión deficiente tienen un costo humano inaceptable.

La pregunta que deben responder las autoridades no es quién tiene la culpa, sino qué harán hoy, para que la espera por una atención de salud no se convierta en una sentencia de muerte.